

La paramilitarización del país en la era de Uribe

Ricardo de Lima
Consultor y ensayista
Madrid

Prácticamente no hay semana en que no aparezcan funcionarios del alto gobierno vinculados con los grupos paramilitares. Las denuncias como lo han señalado diversos analistas son muy graves y comprometen al entorno más próximo del presidente, Álvaro Uribe Vélez, quien hasta ahora no ha asumido su responsabilidad política.

Por el contrario, ante las denuncias de la prensa se va lanza en ristre contra ellas acusándolas de frívolas y de faltar a la verdad.

Los contenidos concretos de las denuncias no han sido desmentidos

Pese a que el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez ha salido a desmentir las afirmaciones del subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez y del ex director de informática, Rafael García, estas denuncias siguen sin ser clarificadas, realmente, por el primer mandatario. En resumen las denuncias siguen estando en pie. La primera, comprobada ya hasta la saciedad de que el DAS, es decir la Policía Política que depende directamente del Presidente de la República, estaba realmente al servicio del narcotráfico y de los paramilitares. Esto lo denunció inicialmente Narváez, luego García y más recientemente, también, Rodolfo Benítez Quintana, quien fue hasta octubre de 2004, jefe de la Oficina de protección especial del DAS. Así pues que la primera mentira del Presidente en sus innumerables autorreportajes como el que se hizo en el canal de RCN según la cual las denuncias no son creíbles puesto que descansan en un preso acusado de borrar antecedentes e historiales de narcotraficantes y paramilitares, no es cierta. Hay dos testigos que denunciaron en su momento la infiltración del narcotráfico y de los paramilitares en la Policía Política, que depende precisamente del Presidente de la República. Está probado hasta la saciedad que el DAS estaba profundamente penetrado y al servicio de narcotraficantes y paramilitares. En el derecho penal dos testimonios coincidentes e independientes son plena prueba.

Un segundo hecho que no ha sido desmentido es el del listado con sindicalistas e intelectuales que el DAS habría suministrado a los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Lo cierto es que la líder sindical Zully Codina Pérez y el profesor universitario Alfredo Correa de Andreis fueron asesinados, la primera una líder sindical de la Asociación de Trabajadores de los hospitales, ANTHOC que fue asesinada en Santa Marta y el segundo un profesor universitario que fue detenido por órdenes de un fiscal que también debería ser investigado, el fiscal 33 de Bolívar con sede en Cartagena. La Familia de Alfredo Correa y su abogado, Antonio Nieto, siempre han sostenido de que se trató de un crimen de Estado, Nieto dijo “fue víctima de una conspiración desde dentro del DAS”. La investigación no avanza y quizás los nuevos elementos que ha entregado Rafael García permitan esclarecer estos

crímenes, así como los de otros sindicalistas asesinados y amenazados en la Costa Atlántica.

El tercer señalamiento tampoco ha sido desvirtuado. Se trata de la denuncia sobre el fraude electoral. La investigadora Claudia López ha demostrado que los paramilitares efectuaron una verdadera zonificación de la votación en la Costa Atlántica. En muchos municipios de Magdalena, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, es decir, en toda la Costa Atlántica se habría realizado, según García, un fraude en las elecciones parlamentarias de 2002, que favoreció, precisamente, a los congresistas que ha venido denunciando la investigadora Claudia López. Las denuncias de García concuerdan plenamente con las denuncias de la investigadora. Solo que ahora García agregó que ese fraude efectuado en todos los departamentos de la Costa Atlántica favoreció a Uribe en cerca de 300 mil votos. Estos 300 mil votos sumaron de manera definitiva para que Uribe ganara en primera vuelta. Otra mentira de Uribe es decir que García ha dicho que el fraude se hizo en el departamento del Magdalena, cuando lo que ha afirmado el ex director de informática del DAS, es que el fraude se hizo en todos los departamentos de la Costa Atlántica. Sobre el fraude en esas elecciones ya el Consejo de Estado lo determinó, por lo menos, para la elección al Senado de la República y por ello ordenó el retiro de varios senadores y la entrada de nuevos senadores, solo que esta investigación no cubrió a la elección para la Cámara de Representantes y tampoco cobijó a la elección presidencial. Hay múltiples indicios, como que en muchos municipios de la Costa Atlántica votó el 100% de los ciudadanos aptos para hacerlo, lo cual es absolutamente anormal en Colombia en donde las tasas de abstención para las elecciones a Congreso y para las elecciones presidenciales rondan el 40% de los ciudadanos y ciudadanas. Aquí tampoco se ha hecho una investigación a fondo. Todo esto mancha la legitimidad del gobierno de Uribe.

Otros organismos infiltrados por el paramilitarismo

Infortunadamente la infiltración del paramilitarismo no sólo se dio en el DAS y en el Congreso de la República, en donde, como dijeron en su momento Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, llegaron a tener el 35% de sus integrantes.

Ahora se viene a saber que la Superintendencia de Vigilancia, que ejerce el control sobre escoltas y seguridad privada, que en Colombia tiene una cifra cercana a los 200 mil vigilantes --que en algunas ciudades han caído bajo el dominio de los paramilitares como se denunció en la campaña electoral en Cartagena-- desde los más altos cargos se favoreció a sectores muy próximos o ligados al paramilitarismo. Allí tuvo que renunciar su director, Fernando Segura, por favores prestados a Enilce López, “la Gata” hoy detenida por lavado de activos. Estos favores fueron los de prestar asesoría jurídica para que recuperara los 130 escoltas privados con sus respectivas armas que el anterior superintendente le había retirado.

En el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, algo así como el organismo encargado de la reforma agraria, tuvo que renunciar su director,

Luís Ortiz, por entregar tierras a paramilitares de las incautadas al narcotráfico y en Finagro, el instituto de financiamiento estatal para el campo, también tuvo que salir su director, Roger Taboada, por la adjudicación de préstamos a un narcotraficante, alias “Micky”, por parte de esta entidad.

El uribismo rural, como se ha sostenido por parte de los investigadores que trabajan el tema de las redes mafiosas y sus relaciones con la vida política local y regional, está completamente compenetrado con el paramilitarismo. Es lo que se ha denunciado como la infiltración mafiosa en los poderes locales y regionales en donde controlan el contrabando, la salud pública, los juegos de suerte y azar y tienden sus tentáculos sobre alcaldías y gobernaciones en medio país. Esto fue --no debemos olvidarlo-- el origen de la depuración de las listas de los partidos uribistas de primera clase, esto es, el Partido de la U dirigido por Juan Manuel Santos y Cambio Radical dirigido por Germán Vargas Lleras. Pero aún en estos partidos continúa la penetración paramilitar, pues, la segunda votación más alta recibida por la lista de Cambio Radical correspondió al hoy electo Senador, Luís Carlos Torres. En una reciente columna de El Espectador, el columnista Felipe Zuleta pregunta al senador Germán Vargas Lleras “¿Es cierto que la Fiscalía identificó unas huellas del senador de Cambio Radical, Luis Carlos Torres y del paramilitar Arroyave en una botella de whisky encontrada en la oficina de éste último en su oficina (sic) de la 109?”¹

El reto del Fiscal General de la Nación

En estas estamos en Colombia. La infiltración paramilitar y la desinstitucionalización que se viene presentando son muy graves. Pero lo más grave es que la justicia no funciona. No ha funcionado en relación con los fraudes electorales o lo hace demasiado tarde y de manera selectiva. En materia penal tampoco funciona y la justicia de la Corte Constitucional aún no llega, nos referimos al examen de la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz que favorece todo este clima de impunidad.

La prensa escrita parece despertar del letargo uribista, pero, la justicia no opera. Así lo muestra la realidad. El desafío de la Fiscalía es enorme, puesto que si actuara podría detener el proceso de desinstitucionalización y de paramilitarización en que nos ha sumido el gobierno del presidente Uribe. Sin embargo, la duda es grande frente a un Fiscal que viene del gobierno y que fue responsable en la definición de los contenidos de la Ley de Justicia y Paz. Tendrá autonomía para encarar las graves denuncias y emprender las investigaciones con celeridad y con transparencia. En poco tiempo lo sabremos.

Madrid 19 de abril de 2006

¹ Zuleta Felipe. El Espectador. Semana del 9 al 15 de abril de 2006.